Edición No.26 - **NOVIEMBRE 2026**

BRONZE
2026 STEVIE® WINNER
INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS®

Panorama

Elecciones en EE.UU.: un nuevo escenario político interno con impacto global

VENEZUELA
CONTRAPESO LEGISLATIVO EN WASHINGTON Y LA ACELERACIÓN DEL TABLERO VENEZOLANO
pag.11

REPÚBLICA DOMINICANA
LA VICTORIA DEMÓCRATA Y SUS IMPLICACIONES EN DOMINICANA
pag.20

CENTROAMÉRICA
UN NUEVO EQUILIBRIO MATIZA LA AGENDA CON CENTROAMÉRICA
pag.26

Pizzolante 50 AÑOS

ÍNDICE

En esta edición — PAG.2

Global

- Elecciones de medio término en EE.UU.: mayor control y supervisión al “PLAN MAGA” — PAG.4
- La IA en la economía: el desafío de delegar y confiar — PAG.9

Venezuela

- Contrapeso legislativo en Washington y la aceleración del tablero venezolano — PAG.11
- Cierto dinamismo comienza a permear en la economía venezolana — PAG.15

República Dominicana

- La victoria demócrata y sus implicaciones para República Dominicana — PAG.20

Centroamérica

- Un nuevo equilibrio en Washington matiza la agenda con Centroamérica — PAG.26

Colombia

- Renacer para crecer y transformar — PAG.32

PANORAMA es producido por PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría gerencial en estrategia y comunicación empresarial. Esta publicación es desarrollada por el equipo de liderazgo de pensamiento y análisis estratégico de la firma, responsable de identificar tendencias regionales clave, analizar dinámicas políticas, sociales y reputacionales, y traducir estos hallazgos en contenido conciso a nivel ejecutivo.

Directorio:
Director/Publisher: Thony Da Silva Romero
Editor en Jefe: Agustín Beroes

Colaboradores / Analistas en esta edición:
Agustín Beroes
Carmen Rosa Gómez
Luis Indriago
Carolina Suero

Colaboradores Externos:
Enzo Moschella
Juan Carlos Ucrós

Arte, Diseño y Diagramación:
Edgar Hernández

Distribución:
Alexis de Sousa
Miranda Sánchez

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación del presente contenido, total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento, ya sea impreso, audiovisual o digital, sin la autorización expresa y por escrito de PIZZOLANTE. Para solicitudes de reproducción o uso de estos contenidos, favor escribir a: pizzolante@pizzolante.com. Todos los derechos reservados.

Los artículos firmados por colaboradores externos expresan la perspectiva de sus autores y no representan necesariamente la posición institucional o editorial de PANORAMA.



Foto: milenio.com

En esta edición.

Orientamos esta nueva edición de PANORAMA analizando, como punto de inflexión, la reconfiguración del mapa político interno y global, tras las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos.

Los resultados de esos comicios no son un asunto meramente local. Redefinen el tono de las relaciones internacionales, las reglas del comercio exterior y el flujo de capitales en el ámbito global y también hacia Latinoamérica. El nuevo equilibrio en el Congreso estadounidense plantea matices decisivos en materia de políticas migratorias, regulación arancelaria y prioridades de cooperación bilateral.

En el ámbito del Caribe y la cuenca subregional, el pulso político norteamericano sobre Venezuela vuelve a recalibrar las proyecciones energéticas, el panorama macroeconómico, la presión de las sanciones y las posibilidades de realización, mas temprano que tarde, de un proceso electoral y de reinstitucionalización claro y transparente.

Mientras que para el Istmo Centroamericano y República Dominicana, el nuevo escenario exige evaluar con precisión el dinamismo del flujo de remesas —pilar del consumo interno— y la evolución del nearshoring. La relocalización de cadenas de suministro ofrece una ventana histórica de oportunidad para estas economías de la región, pero su consolidación dependerá de la estabilidad de las reglas de juego comercial fijadas en la capital estadounidense.

Para los tomadores de decisión, interpretar estos movimientos no es un simple ejercicio académico, sino un imperativo para anticipar volatilidad financiera, ajustar matrices de riesgo y proteger la resiliencia o la apertura operativa y económica, según corresponde en cada país de América Latina.

Sin embargo, la geopolítica no es el único vector que exige atención. En paralelo, la economía global experimenta un cambio estructural impulsado por la Inteligencia Artificial. La IA ha dejado de ser una promesa lejana de eficiencia para convertirse en un factor de producción central. En nuestro informe especial de esta edición, analizamos el impacto tangencial y directo de los modelos predictivos y la automatización avanzada en los mercados emergentes: desde la inclusión financiera y la optimización logística, hasta la urgente necesidad de adaptar el talento humano a esta nueva era. En el caso particular de Colombia, se analizan las nuevas posibilidades que ofrece la explotación petrolera y gasífera.

Para operar en tiempos de complejidad, se requiere una doble mirada: la capacidad de anticipar los vientos geopolíticos externos y la agilidad para liderar la transformación tecnológica interna. Los invitamos a adentrarse en estas páginas estructuradas para ofrecer claridad analítica y visión de futuro, en beneficio del desarrollo regional.



Escrito por:
Agustín Beroes / Market Director
/ Editor de Panorama

Global



Foto: Diario Financiero

Elecciones de medio término en EE.UU.: mayor control y supervisión al “Plan MAGA”

Las recientes elecciones en Estados Unidos configuran un nuevo escenario político, tras la victoria demócrata y la pérdida de las mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso. Este giro ya aflora repercusiones muy importantes, tanto en la política interna, como en la geopolítica global y en la relación con América Latina.

Este reenfoque incrementa la fiscalización al Ejecutivo, lo que representa un retroceso de la iniciativa presidencial que Trump suplirá con el poder de veto, para poder forcejear en la aprobación de leyes o reformas clave durante la segunda mitad de su mandato.

El Capitolio utilizará sus poderes de supervisión para abrir investigaciones exhaustivas sobre decisiones clave del Ejecutivo, finanzas gubernamentales, contratos de seguridad nacional y la gestión de crisis recientes, lo que amplía el juego político hacia la confrontación y la defensa institucional.

En el ámbito global, se amplía el cuestionamiento al gasto militar y la diplomacia MAGA. El resultado electoral refleja el desgaste interno provocado por tensiones geopolíticas -como el conflicto en Irán-. Con un Congreso demócrata, se intensifica la presión para condicionar o restringir fondos destinados a operaciones militares en el exterior y para exigir mayor transparencia en los acuerdos diplomáticos en el Medio Oriente y Venezuela.

Ahora, los legisladores opositores amplían las herramientas para cuestionar el enfoque unilateral de la Casa Blanca en asuntos globales, abriendo debates sobre el papel de Nación en tratados de seguridad internacional y comercio global.

En relación con América Latina, las políticas proteccionistas y el uso de aranceles por parte de la administración Trump -con especial impacto en economías estrechamente integradas como la de México o Canadá- enfrentarán un escrutinio mucho más severo y contrapesos desde el poder legislativo, abriendo canales alternativos para un diálogo institucional mucho más accidentado con el gobierno estadounidense.

Las fluctuaciones en los precios del petróleo, derivadas de la inestabilidad geopolítica internacional, impactan de forma directa en las cadenas de suministro y en el costo de los combustibles en la región latinoamericana, un factor que pesó fuertemente en el descontento de los votantes y que ahora obligará a replantear la estrategia energética de Washington hacia adelante.

En cuanto a las iniciativas de financiación para deportaciones masivas y el control migratorio riguroso, estas enfrentarán mayores trabas presupuestarias y legislativas, moderando eventualmente el alcance de dichas medidas y su repercusión económica en los países generadores de migración y receptores de remesas.

En el ámbito energético, los mercados globales reaccionaron de inmediato en positivo ante la expectativa de una distensión o un repliegue en los frentes de conflicto

Las implicaciones globales

El vuelco electoral en las elecciones de medio término ya asoma ondas expansivas inmediatas en la geopolítica global. El freno a la política exterior intervencionista y el factor Medio Oriente, seguramente, le abrirá espacio a la revisión del conflicto con Irán.

Uno de los catalizadores de la derrota electoral republicana fue el desgaste económico y político derivado de la larga intervención militar en Medio Oriente, iniciada sin la debida ratificación legislativa. Los demócratas intensificarán la presión institucional para restringir fondos, bloquear escaladas bélicas adicionales e investigar las decisiones del Ejecutivo en materia de defensa.

En el ámbito energético, los mercados globales reaccionaron de inmediato en positivo ante la expectativa de una distensión o un repliegue en los frentes de conflicto. Por ejemplo, los precios del petróleo experimentaron descensos ante la lectura de que el margen de maniobra militar de la Casa Blanca se vería impactado por el contrapeso legislativo.

En relación con el conflicto en Ucrania y la relación con la OTAN, los aliados europeos y los líderes de la Unión Europea han recibido los resultados con una mezcla de cautela y alivio. Mientras que el sector diplomático europeo confía en que un congreso demócrata impulse con mayor firmeza la ayuda financiera y militar a Ucrania -contrarrestando la línea de aislamiento o entendimiento unilateral con Moscú que impulsaba la Casa Blanca-; algunos analistas recuerdan que el enfoque exterior de EE.UU. mantiene un fondo marcadamente transaccional.

Desde el Kremlin se ha restado peso oficial al impacto directo en sus planes estratégicos, aunque reconocen que la capacidad del presidente estadounidense para pactar o romper acuerdos al margen del Capitolio queda relativamente disminuida.

En relación con el comercio internacional, la política de aranceles unilaterales y las medidas proteccionistas; la administración Trump encuentra ahora un dique de contención en el nuevo poder legislativo. Los socios comerciales globales -incluyendo a potencias como China, que también ha optado por una postura de cautela y diálogo prudente- advierten que cualquier nueva escalada arancelaria agresiva requerirá sortear un Congreso opositor.

Algunos gobiernos y bloques económicos ven en este cambio legislativo una oportunidad para propiciar un multilateralismo más amplio y predecible y frenar medidas económicas internas que han presionado al alza la inflación global y el costo de vida en distintas regiones del planeta.

Por otro lado, también se prevén repercusiones ideológicas en ciertos liderazgos globales y regionales. En el plano internacional, los resultados en Estados Unidos han sido interpretados por diversos líderes progresistas y centristas -como en el ámbito europeo- como una señal de fatiga ciudadana frente a la polarización extrema, el negacionismo climático y los discursos de confrontación identitaria.

Incluso se habla de un cierto efecto espejo en aliados regionales. Gobiernos alineados estrechamente con la anterior estrategia de la Casa Blanca -como el caso de Javier Milei en Argentina- enfrentan ahora un panorama donde su principal socio político pierde el dominio absoluto de la agenda interna y legislativa en Washington, obligando a replantear cálculos diplomáticos y financieros de mediano plazo.



Foto: Banca y Negocios

Los impactos en LATAM

El cambio de control hacia el Partido Demócrata en el Congreso norteamericano, establece un nuevo mapa de contrapesos institucionales que también repercute directamente sobre América Latina.

Entre otros temas clave, figura la política migratoria, los presupuestos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y los flujos de remesas hacia varios países en la región.

Aunque el Poder Ejecutivo, en manos de Donald Trump, conserva facultades amplias para aplicar las leyes migratorias y ordenar deportaciones, un Congreso controlado por la oposición cuenta con la potestad de restringir o condicionar los fondos presupuestarios destinados a las agencias de control fronterizo y del ICE. Esto abre la puerta a una mayor fiscalización sobre posibles abusos y a un debate más intenso sobre la asignación de recursos para los centros de detención de inmigrantes.

En paralelo está el pulso sobre los impuestos a las remesas. Para economías altamente dependientes de estas divisas -como México y el Triángulo Norte de Centroamérica-, la nueva composición legislativa buscará debatir de forma directa la continuidad o modificación de gravámenes vigentes como el impuesto aplicado a las transferencias de dinero en efectivo desde EE.UU, así como el acceso de los migrantes al sistema financiero formal.

En materia de comercio bilateral, aranceles y la revisión del T-MEC, en el contexto de contención al proteccionismo comercial; países como México, estrechamente integrados a las cadenas de valor de América del Norte, enfrentan un escenario donde las medidas arancelarias unilaterales de la Casa Blanca encuentran nuevos y amplios filtros de control, análisis y aprobación legislativa.

Cualquier modificación o revisión profunda del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) requerirá sortear audiencias y comités congresionales más críticos, lo que favorece un margen institucional más previsible para los flujos de exportación e inversión extranjera en la región.

Mientras que la asistencia en materia de seguridad y cooperación internacional para el financiamiento de programas antidrogas y de justicia que vinculan a Washington con socios estratégicos como Colombia, México y Centroamérica— quedan ahora sujetos a nuevas negociaciones presupuestarias y controles de supervisión legislativa.

Con seguridad, el nuevo Congreso estadounidense incrementará la exigencia de informes detallados sobre el uso de los fondos de ayuda exterior, condicionando los desembolsos a métricas estrictas de transparencia institucional y derechos humanos.

Al tanto que la disputa geopolítica frente a potencias extrarregionales como China, se verán reexpuestas al consenso bipartidista pero con matices tácticos. Si bien tanto demócratas como republicanos coinciden en frenar la creciente influencia económica y tecnológica de China en América Latina, un Congreso demócrata tiende a matizar las estrategias de confrontación comercial directa, abogando por un enfoque que priorice las alianzas multilaterales y el fortalecimiento de la infraestructura institucional local frente a la inversión asiática.

Muchos de los temas mencionados, por no decir todos, desde ya comienzan a condicionar la ruta electoral presidencial en Estados Unidos, prevista para el año 2028.

El revés electoral del oficialismo republicano trumpista y la recuperación demócrata de ambas cámaras del Congreso reconfiguran las apuestas y posicionan a distintas figuras clave dentro de ambos partidos hacia el ejercicio de la presidencia de la república a partir de 2029.



Escrito por:
Agustín Beroes / Market Director
/ Editor de Panorama



Foto: Mises Institute

La IA en la economía: el desafío de delegar y confiar

En menos de cuatro años, la inteligencia artificial pasó de responder preguntas a tomar decisiones. Para los líderes de América Latina, la cuestión ya no es si adoptarla, sino cuánto delegar en ella y cómo seguir siendo responsables de lo que decide

Cuando OpenAI lanzó ChatGPT a finales de 2022, la mayoría lo recibimos como un buscador sofisticado: una herramienta capaz de responder casi cualquier pregunta, redactar un informe o investigar un tema en segundos. Muy pronto, la inteligencia artificial dejó de limitarse a responder y empezó a colaborar con nosotros: a planificar, proyectar escenarios y recomendar cursos de acción. Hoy decide y actúa por su cuenta: negocia con proveedores, ajusta precios y ejecuta procesos completos sin intervención humana directa.

La IA ya no es solo una tecnología: es un nuevo actor económico y social que avanza a una velocidad inédita. Su llegada plantea a empresas, gobiernos y personas una pregunta que va más allá de lo técnico: ¿cuánto vamos a delegar en ella y cuánto podemos confiar en lo que hace?

Un nuevo tablero para los actores económicos

En 1937, Ronald Coase, más tarde premio Nobel, explicó que las empresas existen para organizar y optimizar la asignación de recursos escasos, porque recurrir al mercado tiene costos: buscar proveedores, negociar y hacer cumplir contratos y gestionar los factores productivos. Casi noventa años después, la IA transforma la naturaleza de la escasez y amenaza con reducir drásticamente esos costos y la forma en que los factores productivos se combinan e incrementan su productividad. Investigadores del MIT han llamado a este fenómeno la «singularidad coasiana»: agentes de IA que buscan, comparan, negocian y contratan a una velocidad y una escala imposibles para un humano. El resultado: intermediarios que pierden su razón de ser, mercados más eficientes, capacidades humanas potenciadas y definiendo nuevas relaciones entre trabajadores, clientes, empresas y Estado.

Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb, de la Universidad de Toronto, añaden una clave: la IA acelera y abarata la predicción, pero toda decisión sigue requiriendo juicio, y quien controla las decisiones controla el poder económico. Thomas Davenport muestra que el valor surge de rediseñar procesos y cadenas de valor, no de instalar la tecnología. Daniel Susskind, de Oxford, advierte que la IA altera la relación entre trabajo y capital y obliga a repensar la distribución de la riqueza y el papel del Estado. Y el Nobel Daron Acemoglu aporta una nota de prudencia: los beneficios pueden ser más modestos de lo prometido y concentrarse en pocas manos si no se acompañan de instituciones adecuadas.

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, de la CEPAL y el CENIA, el 27,6 % de las grandes empresas de la región ya incorporó IA, frente al 12,8 % de las medianas y apenas el 6,8 % de las pequeñas.

La empresa por dentro: gestionar, aprender y liderar de otra manera

Dentro de las organizaciones, el cambio ya es visible: decisiones que antes descansaban en la experiencia y la intuición se apoyan en análisis que procesan en minutos lo que a un equipo le tomaba semanas.

Cambia también el liderazgo: el líder ya no es quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe hacer las preguntas correctas, interpretar lo que la máquina propone y asumir el criterio final. Muchas tareas rutinarias desaparecen, surgen otras y casi todas exigen colaborar con sistemas inteligentes. La formación continua deja de ser un beneficio para convertirse en una condición de supervivencia, y el talento que combina conocimiento del negocio con dominio de estas herramientas pasa a ser el recurso más escaso.

Y esa colaboración no ocurrirá solo a través de una pantalla. Los robots humanoides salen de los laboratorios: en el primer semestre de 2026 se enviaron más de 22.000 unidades en el mundo, casi cuatro veces más que un año antes. Nos tocará trabajar y compartir espacios con ellos.

Competitividad: nadie puede quedarse atrás

La brecha entre quienes adoptan la IA y quienes esperan se amplía, y América Latina no parte en buena posición. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, de la CEPAL y el CENIA, el 27,6 % de las grandes empresas de la región ya incorporó IA, frente al 12,8 % de las medianas y apenas el 6,8 % de las pequeñas. Casi todos los países tienen una estrategia nacional de IA, pero solo Brasil y Colombia le asignan presupuesto. En Centroamérica, Costa Rica lidera con 56 puntos sobre 100, seguida por Panamá con 39,3 y El Salvador con 37,9.

Para las empresas, la ventaja no estará en el acceso a la tecnología, que será cada vez más barata y común, sino en la velocidad y el criterio con que se integre en el negocio.

Chips, energía y minerales: la geopolítica detrás de la IA

Detrás de cada respuesta de la IA hay semiconductores avanzados, centros de datos que consumen enormes cantidades de energía y minerales críticos como el cobre y el litio. Son recursos limitados, y la competencia por ellos, con controles a la exportación de chips y alianzas para asegurar minerales y energía, ya marca la agenda de las grandes potencias. Quien los asegure a tiempo tendrá ventajas difíciles de igualar.

Para América Latina, es un riesgo y una oportunidad. La región no fabrica chips de vanguardia, pero Chile y Perú producen más de un tercio del cobre mundial, y el triángulo del litio, formado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra cerca del 43 % de los recursos conocidos de ese mineral. La pregunta es si nos limitaremos a exportar materias primas o si sabremos convertirlas en capacidades propias.

Esa capacidad exige algo menos visible: saber evaluar la tecnología que importamos. Un algoritmo puede funcionar con gran precisión en el país donde fue entrenado y perder confiabilidad al cruzar una frontera, porque cambia el contexto, los hábitos de consumo, el mercado laboral y los registros de datos. Cada país necesita datos locales de calidad, especialistas capaces de auditar modelos e instituciones que fijen reglas y criterios de prueba; de lo contrario, importaremos los sesgos de otros.

El verdadero riesgo: dejar de cuestionar

El mayor riesgo de la inteligencia artificial no es que se equivoque. Se equivocará, como cualquier experto. El riesgo es que, a fuerza de verla acertar sin entender cómo llega a sus conclusiones, dejemos de evaluarla y cuestionarla.

Un ejemplo sencillo lo ilustra. Imaginemos que un sistema analiza datos de Ciudad de Panamá y descubre que los días con más paraguas en la calle son también los días con más empleados que llegan tarde. Los datos muestran una correlación: dos hechos que ocurren al mismo tiempo. Pero no dice cuál es la causa, el factor que provoca el cambio, ni cuál es el efecto, el resultado que esa causa produce. Si concluye que los paraguas causan los retrasos, se equivoca: la causa es la lluvia; paraguas y retrasos son sus efectos. Los algoritmos encuentran patrones estadísticos en los datos pasados, pero no entienden bien por qué ocurren.

“La IA no nos exime de pensar; nos exige pensar mejor”

En los negocios, el error rara vez es tan evidente. Si un modelo observa que salarios e inflación suben juntos y concluye que los salarios causan la inflación, puede estar confundiendo correlación con causalidad. Quizás un alza de la energía empuja a ambos; o quizás es la inflación la que lleva a los trabajadores a exigir mejores salarios, y el modelo habría confundido la causa con el efecto. La IA es muy buena encontrando patrones, pero un patrón no explica qué lo produce. El criterio humano sí es capaz de hacerlo.

A esto se suma el sesgo de los datos de entrenamiento: los sistemas no saben que lo tienen y responden con la misma seguridad cuando aciertan que cuando se equivocan. Y la escala lo amplifica: un error automatizado puede repetirse miles de veces antes de que alguien lo detecte.

La Unión Europea aprobó en 2024 la primera ley integral sobre IA, que exige transparencia en su uso y más controles cuanto más sensible es la decisión. Aunque en 2026 dio más tiempo para cumplir las obligaciones de los sistemas de alto riesgo, que en general rigen desde diciembre de 2027, el principio se mantiene: una herramienta que parece funcionar bien no es necesariamente confiable.

De ahí una regla práctica: graduar la supervisión según el impacto. Las tareas rutinarias y reversibles pueden automatizarse con controles periódicos; las que afectan a clientes, trabajadores o recursos importantes deben pasar por revisión humana, y las que comprometen la reputación, la salud, los derechos o el patrimonio deben decidirlas personas, con la IA como apoyo y no como árbitro. Nadie aceptará como excusa que «lo decidió el algoritmo»: la responsabilidad siempre recaerá en quien eligió confiar en él.

Gobernar sin frenar

La respuesta no es frenar la inteligencia artificial, sino gobernarla. El principio conocido como *human in the loop* establece que la persona debe conservar siempre la última palabra. No se trata de revisar cada decisión rutinaria, sino de aprobar las de mayor impacto y mantener sobre las demás la capacidad de supervisar, corregir y detener eventualmente el sistema. Para ello, las organizaciones necesitan una gobernanza que evalúe la IA de forma independiente, sin depender de la evidencia con la que fue entrenada, y que registre cada decisión relevante, fallo e incidente. Esa trazabilidad no es burocracia: es lo que permite aprender, rendir cuentas y confiar. Bien diseñada, no frena la innovación: permite escalarla con seguridad.

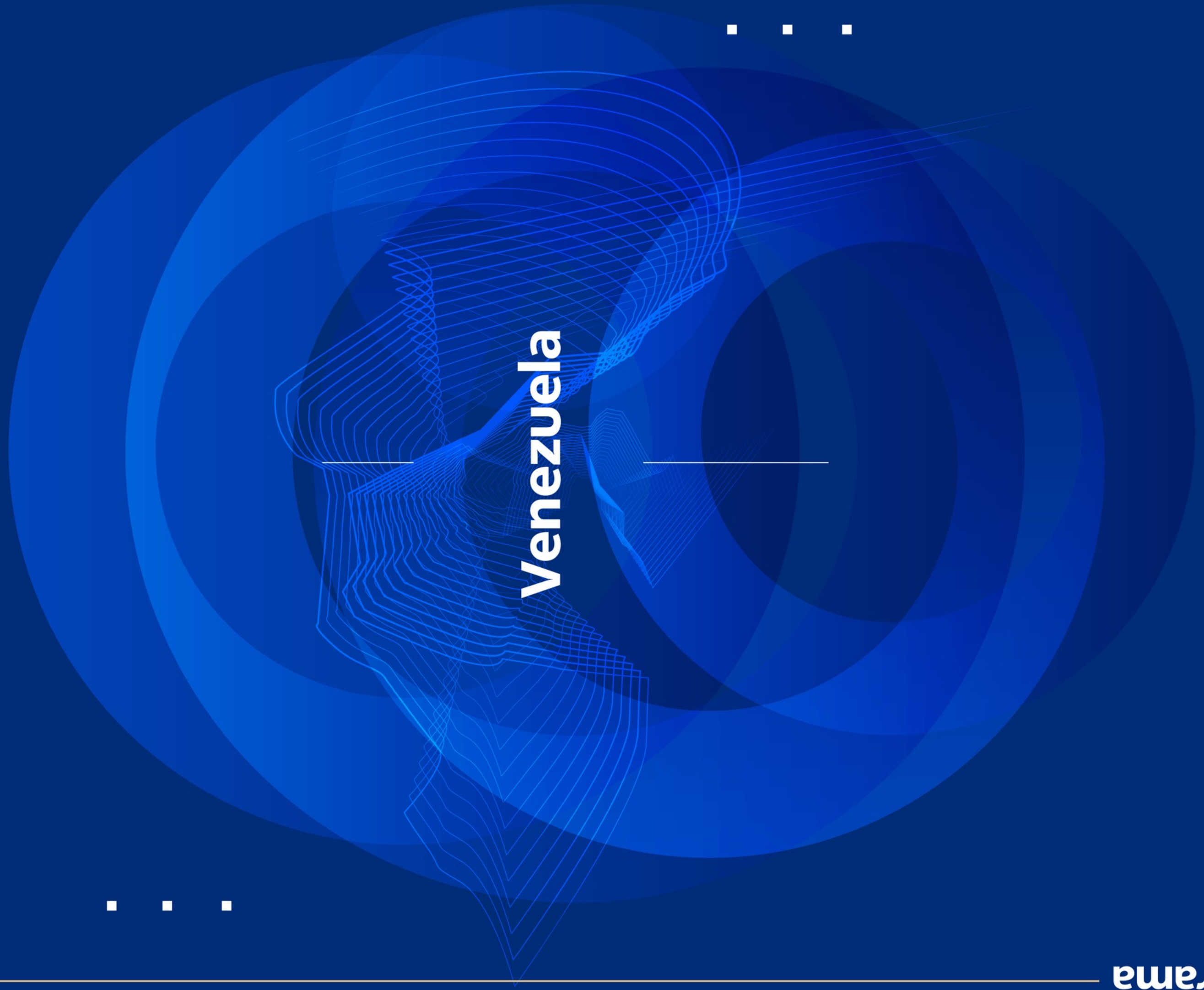
Delegar con criterio

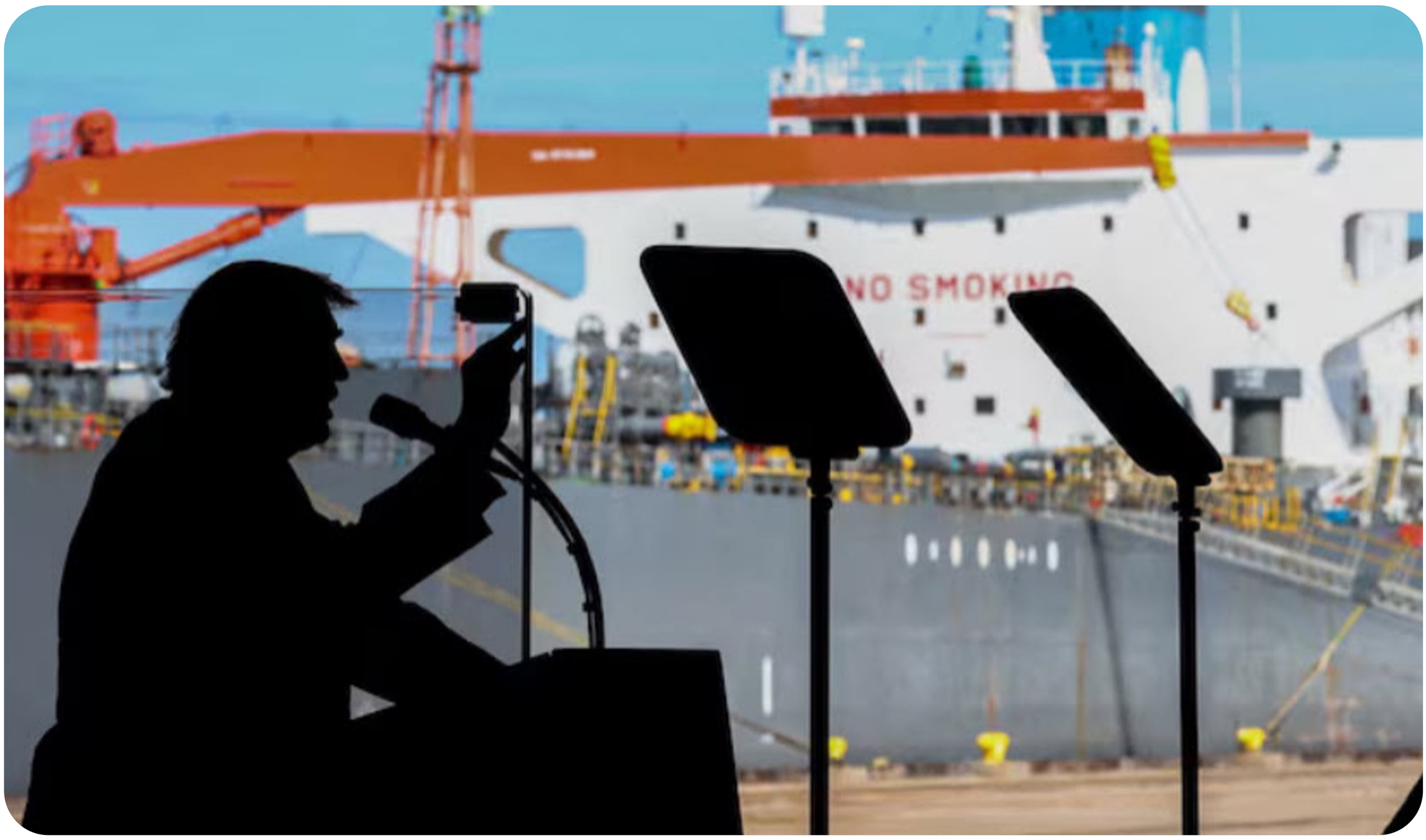
Ya no hablamos de un asistente inteligente, sino de equipos de agentes que negocian, vigilan riesgos y ejecutan decisiones mientras dormimos. La pregunta decisiva no será qué puede hacer la IA, sino cuánto estamos dispuestos a delegar en ella en el plano personal, empresarial, social e institucional.

Prosperarán no las organizaciones que más deleguen, sino las que sepan delegar con criterio: las que aprovechen lo que las máquinas hacen mejor para dedicarse a lo que solo los humanos podemos aportar, como el juicio, la empatía, la creatividad, el contexto, la ética y la responsabilidad. Esa es la decisión que hoy deben tomar los líderes de América Latina.



Escrito por:
Enzo Moschella / Economista con maestría en Blockchain & Fintech y Senior Partner de EconoAction Panamá


Venezuela



Contrapeso legislativo en Washington y la aceleración del tablero venezolano

Las “midterms” o elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos han sido durante meses parte esencial del tablero donde se desarrolla el proceso interno de Venezuela. Eso incluye desde la propia salida de Nicolás Maduro del poder, por acción militar de Washington el 3 de enero, pasando por el prolongado interinado de Delcy Rodríguez hasta el ritmo que ha tenido la articulación de distintos elementos para que Venezuela avance hacia un cambio político democrático. En buena medida todo se ha acompasado a las estrategias de Donald Trump, dentro y fuera de su país, con estas elecciones internas como centro.

Ahora, tras conocerse sus resultados, es obvio que habrá cambios con el partido demócrata avanzando con fuerza en ambas cámaras del Congreso de EE. UU. y ganando el control mayoritario tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Pero aún así no se puede perder de vista que la estrategia de fondo de Estados Unidos hacia Venezuela es una política de Estado irreversible, que busca asegurar el control energético, reducir la influencia de potencias rivales en la región y contener la crisis migratoria. Estos puntos se sostendrán.

No en vano el presidente Trump escenificó un mitin de apoyo a la candidatura al Senado del republicano Ken Paxton, usando como telón de fondo la llegada a Corpus Christi, Texas, del carguero Angerona transportando 1 millón de barriles de petróleo venezolano. En medio de la campaña, se trató de una forma de visibilizar el éxito energético directo para el bolsillo del ciudadano estadounidense de su intervención en Venezuela.

Con el predominio demócrata en el Congreso de EE. UU. no es descartable que haya mayor escrutinio sobre la administración de recursos asociados a Venezuela o sobre las condiciones y términos pactados en ámbitos como el petrolero

No obstante, tras las "midterms", la ejecución de la estrategia pasará de esta especie de vía libre, con la que ha contado la Casa Blanca, a **un terreno más condicionado** por la política doméstica y la legalidad institucional de Washington. Es un período hasta las presidenciales de 2028, donde coexistirán un Donald Trump al que le resta gobernar dos años con un Congreso adverso, con los republicanos intentando recomponerse, y los demócratas tratando de evidenciar que pueden hacer algo más que capitalizar el descontento del ciudadano estadounidense con el mandatario.

En ese camino contar con el **recurso energético de Venezuela** es medular para ambos partidos, aunque puede haber matices. Un Congreso con mayoría demócrata podría prestar más atención a temas como los **derechos humanos, las debilidades institucionales que enfrenta Venezuela y la transparencia de algunos acuerdos alcanzados** en sectores clave como el petrolero, con mediación y participación de Washington.

El hecho de que Venezuela logre llegar a elecciones libres y que un gobierno democrático, legal y legítimo pueda avalar los acuerdos alcanzados es un punto clave, que puede ser una de las mejores defensas para el propio Gobierno de Trump. Porque no es descartable que haya mayor escrutinio sobre la administración de recursos asociados a Venezuela o sobre las condiciones y términos pactados, por ejemplo, con la empresa **North American Blue Energy Partners (Nabep),** donde la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EE. UU. habría convenido un 35% de participación accionaria en el **"mega acuerdo"** petrolero suscrito con el interinato de Rodríguez.

De igual modo puede pasar con lo que asoman medios como *The New Yok Times* en relación con los **Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas** (SOFA, por sus siglas en inglés), que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría negociando con Rodríguez. El SOFA buscaría fijar un marco jurídico para entrenamientos, ejercicios bilaterales y el despliegue a largo plazo de unidades militares en zonas estratégicas de Venezuela. Es, sin duda, un tema delicado para la evaluación interna de EE. UU, a la luz de sus intereses y bajo el prisma de los demócratas en los comités correspondientes del Congreso.



Foto: @usembassyve

A mediados de octubre, la Embajada de Estados Unidos en Caracas reactivó oficialmente su Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines

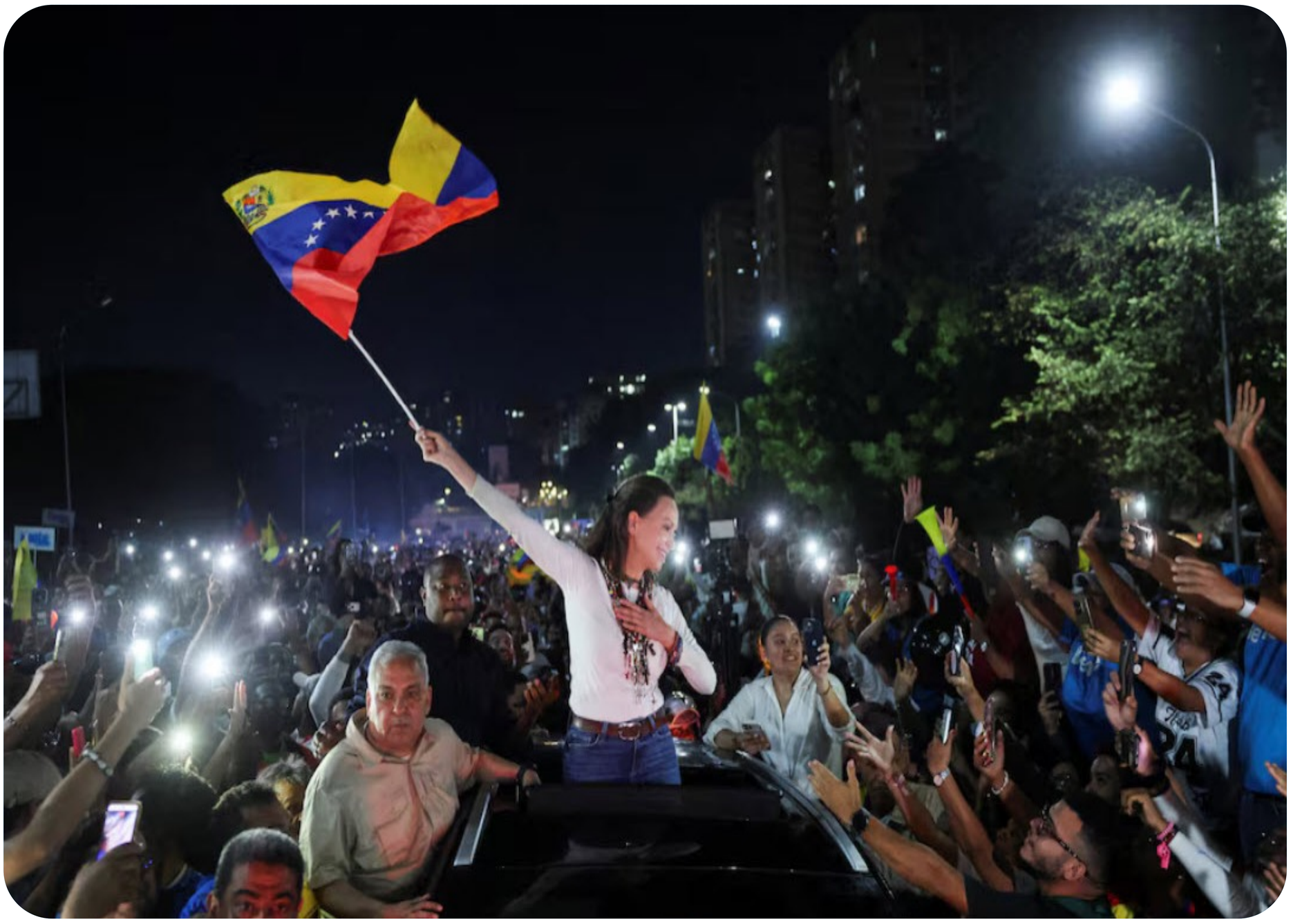


Foto: Reuters

El 25 de octubre, a solo días de las "midterms", regresó a Venezuela la líder opositora María Corina Machado

PRESIÓN ADICIONAL

En este punto es fundamental regresar la mirada sobre **Venezuela** donde, en paralelo, se ha seguido una **línea de acción** que también responde a lo hilos políticos que han marcado la dinámica en y desde EE. UU.

El 25 de octubre, a solo días de las "midterms", regresó al país **María Corina Machado** tras el paso de diez meses en el exterior, un periodo en el que, como denunciaron sus equipos políticos y la propia líder opositora, sorteó bloqueos burocráticos y limitaciones logísticas que imposibilitaron sus planes previos de retorno.

Su llegada generó una multitudinaria reacción y se tradujo en una **reactivación de las expectativas ciudadanas**, convirtiéndole en un elemento transformador del panorama que se había impuesto en Venezuela desde el 3 de enero, siguiendo ritmos inerciales lentos de estabilización controlada bajo el tutelaje de EE. UU.

Basta ver el **proceso de diálogo** iniciado en agosto por mediación de Washington, entre el **gobierno interino y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015**, que se había enfocado en reformas institucionales con miras a un cronograma electoral a mediano plazo, sin fechas claras ni un cronograma específico. Pero la llegada de Machado introdujo un factor de **presión adicional**, que podría incidir en los tiempos para que efectivamente ocurra una transición política en el país.

Destaca así que el 26 de octubre el secretario de Estado de EE. UU., **Marco Rubio**, expuso la necesidad de acelerar el proceso al decir que tiene que "**cambiar la infraestructura de las elecciones**; no en 10 años, no en cinco años, no en dos años".

Abrir la opción de que haya **elecciones en 2027** es un cambio en el discurso, ya que la ruta establecida por Washington para el país, tras sacar a Maduro de la presidencia, tenía tres fases sucesivas (Estabilización, Recuperación y Transición) sin fechas concretas.

Machado capitalizó de inmediato este cambio, y en su rueda de prensa del 29 de octubre afirmó que la secuencia planteada por Rubio deja clara "la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027". Y **2027 está en medio de la ruta a presidenciales en EE. UU**., con un Congreso demócrata que toma posesión en enero. Un **cruce de calendarios** que no es casual, y que abre ventanas de riesgo y oportunidades.

Focos de atención

Para quienes siguen la evolución de Venezuela desde una perspectiva empresarial, hay un par de aspectos medulares que centrarán la agenda de los próximos meses:

El petróleo, pieza central

- La estrategia de EE. UU. para Venezuela no dejará fuera los valiosos recursos energéticos del país, por lo que puede haber ajustes o variaciones en los acuerdos; pero **la reactivación de la industria petrolera local seguirá siendo prioridad.**

- Acá es clave el mensaje de María Corina Machado en relación con el acuerdo con Nabep que, aseguró, “no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”. Además, propuso la **creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos** para dictar un nuevo marco institucional. Esto abre la posibilidad de que, de ocurrir un cambio político en Venezuela, se mantendrán los acuerdos firmados legalmente y se avanzará hacia renegociaciones para buscar mejores términos y auditorías basadas en la certificación real de recursos.

- Para las **empresas** vinculadas directa o indirectamente al sector energético, el elemento a monitorear no es solo la continuidad de los acuerdos, sino las posibles revisiones regulatorias y exigencias de transparencia que podrían acompañar una nueva fase institucional. La capacidad de adaptación a **cambios contractuales**, requisitos de **cumplimiento** y procesos de **auditoría** puede convertirse en una ventaja competitiva.

- Es de esperar que la recuperación de la actividad petrolera seguirá teniendo efectos más allá del sector energético. El desafío para las organizaciones está en **identificar oportunidades vinculadas a esta reactivación** en el marco de la inestabilidad existente.

El cálculo electoral

- **La ruta electoral en Venezuela** sigue siendo difusa, aun con la fecha tentativa de 2027 que se asoma tras las presiones internas.

- La **fricción** entre un ala que busca acelerar la transición electoral, como es la que lidera Machado, y otra que intenta dilatarla o controlarla, como la del Gobierno interino de **Delcy Rodriguez,** puede disparar escenarios de tensión social o protestas callejeras.

- Así, la posibilidad de una elección presidencial en 2027 incorpora una nueva variable para empresas e inversionistas. Aunque **podría acelerar decisiones** vinculadas a la recuperación económica y la normalización institucional, también **incrementa la incertidumbre** sobre los tiempos de ejecución de reformas, la estabilidad de acuerdos alcanzados durante la transición y las prioridades que prevalecerán una vez se abra formalmente el ciclo electoral.

- Al encontrarse 2027 en el año intermedio previo a las presidenciales de 2028, **Washington** medirá cada paso según su impacto doméstico, y ese también es un factor crítico.

- En este contexto, **los procesos de planificación para 2027 y 2028** deberían incorporar escenarios alternativos respecto a autorizaciones regulatorias, desembolsos de inversión y cronogramas de ejecución de proyectos. La principal variable de riesgo no parece ser la ausencia de oportunidades, sino la dificultad para anticipar los tiempos políticos que condicionarán su materialización.



Escrito por:
Carmen Rosa Gómez / Senior Consultant



Foto: SIVENEZUELA

Cierto dinamismo comienza a permear en la economía venezolana

La firma de decenas de acuerdos energéticos internacionales, que abarcan contratos petroleros, gasíferos y de infraestructura, con diversidad de corporaciones globales bajo un nuevo marco de flexibilización y participación privada; está generando el inicio de un efecto dinamizador transversal en varios sectores de la economía venezolana.

El desempeño económico local ha comenzado a dar señales de recuperación, impulsado por un repunte en la producción petrolera, la expansión del comercio y la estabilización de ciertos agregados macroeconómicos.

Diversos analistas y firmas privadas estiman que el PIB del país podría cerrar con un crecimiento ubicado entre 4 y 10% en 2026, posicionando a Venezuela con una razonable tasa de expansión en la región, dándose inicio a la reversión de la caída de 75% que tuvo el Producto Interno Bruto con respecto al tamaño que tenía la economía en el año 2013, tras más de 10 años de recesión.

Esta reactivación responde al nuevo escenario operativo condicionado tras la intervención de Estados Unidos en enero pasado y a la coincidencia de varios factores dinamizadores clave.

Se viene dando una aceleración en el incremento operativo de la industria petrolera, como consecuencia de la flexibilización regulatoria ocurrida y de las alianzas internacionales pactadas y que han hecho que la producción de crudo esté hoy estabilizada por encima de 1.2 millones de barriles diarios de petróleo. Por ejemplo, el bombeo en el estado Zulia, uno de los principales distritos petroleros del país, ha pasado de 70 mil a 370 mil barriles diarios, lo que comercialmente inyecta un mayor flujo de divisas en la economía.

El sector del comercio y los servicios comienza a mostrar un nuevo vigor. Gremios comerciales e industriales, como Consecomercio y Conindustria, reportan un cierto repunte interanual del consumo y manufactura en los últimos 10 meses.

Aunque los desafíos de precios continúan latentes (alta inflación interanual recurrente), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha registrado variaciones a la baja. El Banco Central de Venezuela ha informado menores niveles de inflación mensual -de hasta 1 dígito- en los últimos meses, en comparación con períodos anteriores.

En Venezuela se viene dando también un proceso importante de maduración de la economía digital. El ecosistema de pagos móviles e inteligentes se ha expandido rápidamente en los últimos años, sirviendo como soporte transaccional inmediato, transformando los parámetros tradicionales de la banca nacional en su conjunto.

Alianzas estratégicas específicas con gigantes tecnológicos, como los convenios con GE Vernova o con la empresa turca Karpowership; buscan fortalecer tanto el sistema nacional como el suministro de energía interno de la propia industria petrolera.

Son diversos los sectores que se están viendo impulsados por el impacto de la reactivación energética.

Construcción, ingeniería y obras civiles
La industria petrolera y gasífera requiere de una urgente recuperación de infraestructura física. La reactivación de campos, la perforación de pozos y la construcción de instalaciones de superficie exigen obras civiles a gran escala.

Ello está estimulando la movilización de contratistas de ingeniería, la fabricación de estructuras metálicas, el montaje industrial y el desarrollo de obras asociadas a la red de oleoductos, gasoductos y centros operacionales, como el reacondicionamiento de patios de tanques de almacenamiento de crudo.

Sector eléctrico y de tecnologías de energía
Históricamente, los apagones y la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) han representado un cuello de botella crítico. Alianzas estratégicas específicas con gigantes tecnológicos, como los convenios con GE Vernova o con la empresa turca Karpowership; buscan fortalecer tanto el sistema nacional como el suministro de energía interno de la propia industria petrolera.

Esto da lugar a la movilización de empresas proveedoras de equipos eléctricos, transformadores, servicios de mantenimiento especializado, automatización industrial y proyectos de generación termoeléctrica para estabilizar el suministro en zonas industriales clave, petroleras y no petroleras.

Manufactura metalmecánica y suministros industriales
La cadena de valor de los hidrocarburos depende fuertemente de insumos pesados. Por eso, la demanda de tuberías, válvulas, bridas, revestimientos anticorrosivos, repuestos mecánicos y equipos de seguridad industrial impulsará de forma directa a la industria metalmecánica nacional, la cual comienza a encontrar mayores canales de suministro y financiamiento por intermedio de la banca.

Transporte, logística y servicios portuarios
El incremento sostenido del bombeo de crudo y la meta de producir y exportar moléculas de gas y derivados petroquímicos exigen una eficiente red logística.

Estos procesos implican la reactivación de manera importante del transporte de carga pesada terrestre, la logística fluvial/marítima, el uso de gabarras y los servicios en muelles y terminales de embarque, como los de los estados Zulia, Anzoátegui y Carabobo; beneficiando a las empresas de transporte y agencias navieras.

Sector petroquímica y gasífero
Otro de los ejes clave de los nuevos convenios es la comercialización del gas y el desarrollo petroquímico. La explotación de bloques gasíferos impulsa la industria de procesamiento de gas doméstico e industrial, así como la producción de materias primas petroquímicas como fertilizantes, resinas y plásticos, fundamentales para reactivar el sector agrícola y la industria manufacturera de consumo masivo.

Comercio y servicios
En la medida que el flujo de caja petrolero y los ingresos fiscales mejoren, y se otorguen mayores créditos comerciales y bancarios orientados a la producción, se dinamiza el sector del comercio al mayor y detal, la gastronomía, hotelería ejecutiva y bienes raíces corporativos, especialmente en zonas de alta actividad petrolera como los estados Zulia, Monagas, Anzoátegui, Bolivar y las región central del país.

Mercado laboral, servicios profesionales y capacitación
La reactivación operacional ha disparado la demanda de talento técnico especializado, como ingenieros petroleros, geólogos, técnicos electricistas y especialistas en seguridad. Esto ha provocado un retorno paulatino de profesionales especializados, una presión al alza en las remuneraciones del sector formal y un incremento del empleo directo e indirecto vinculado a la recuperación de la industria petrolera nacional y sus sectores conexos.

Otros sectores beneficiados

Diversos estudios elaborados por entidades académicas acreditadas, como la Universidad Católica Andrés Bello, o por parte de analistas financieros; advierten que toda esta movilidad y dinamismo responde a un "rebote económico" inicial que ordenadamente debería permear progresivamente hacia una normalización plena de todos los sectores de la economía, siempre y cuando se establezcan todos los correctivos e incentivos de política macroeconómica que lo hagan posible.

El sector inmobiliario

Los signos de movilidad y dinamismo económico, también están acompañados por una importante actividad promocional y de búsqueda de oportunidades en el sector inmobiliario y de vivienda.

Según una investigación realizada por el medio Visión24 en octubre, la plataforma inmobiliaria Propiedash registró 1.393.222 visitantes únicos durante sus primeros cuatro meses de funcionamiento, de los cuales 151.807 ingresaron desde fuera de Venezuela. Esto representa el 10,9% del total, según datos de la compañía revisados por Bloomberg. Estados Unidos encabeza las visitas internacionales con 39.377 usuarios, seguido de Colombia, con 38.226, y Ecuador, con 23.733. También figuran República Dominicana, España y Argentina entre los países de procedencia de quienes consultan la oferta inmobiliaria venezolana.

Las cifras muestran que existe interés desde el exterior por explorar opciones inmobiliarias en Venezuela, “aunque los datos expuestos no permiten determinar cuántos usuarios concretan compras o alquileres”, pero sí el interés de obtener información concreta.

Por otra parte, se están observando procesos de inversión, rehabilitación y de relanzamiento o reposicionamiento de importantes centros comerciales, especialmente en Caracas y el centro del país.

Sector automotor

Otro sector que viene teniendo una fuerte presencia y expansión en el país es el de la venta de automóviles, camiones y motocicletas, particularmente en los últimos tres años, pero con un énfasis destacado en el año 2026.

El mercado automotor venezolano viene mostrando una etapa de importante recuperación y transformación durante el trienio 2024-2026. Tras una contracción extrema previa, la entrada de nuevas marcas importadas, principalmente asiáticas, la diversificación de la oferta comercial y el regreso paulatino de esquemas de financiamiento privado; han dinamizado sustancialmente el sector.

Según la estadísticas recopiladas por la Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ) y otros gremios afines, en 2024 se comercializaron 17.558 vehículos nuevos; en 2025 unas 38.610 unidades vendidas; y en 2026 se espera -por el nuevo contexto- que la venta de nuevos vehículos sobrepase con creces las 40 mil unidades.

Fundamentalmente, la estructura de venta de las unidades nuevas ha estado integrada por vehículos sedanes, pickups, camiones ligeros, medianos y de carga.

El mercado de las motocicletas ha tenido un comportamiento masivo y desproporcionadamente mayor en Venezuela, en el mismo período. CAVENEZ estima que el promedio anual de venta de este tipo de vehículos sobrepasa las 100.000 unidades por año.

Esta expansión se ha debido a la necesidad de contar con un medio económico y rápido ante las limitaciones del transporte público tradicional y los cotos del combustible; y al auge del reparto a domicilio (delivery) y los servicios urbanos de encomiendas. La compra de motocicletas en Venezuela es mixta: unidades importadas y las producidas por 11 empresas industriales y plantas agrupadas en la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motociclos de Venezuela (AIFEM).



Escrito por:
Agustín Beroes / Market Director / Editor de Panorama

PIZZOLANTE

Insights.

Galardonado con el Gold MarCom 2026

Un reconocimiento internacional al contenido que construye confianza en América Latina y el Caribe.

Más de 140 ediciones y 90,000 envíos aportando inteligencia contextual y análisis estratégico al entorno empresarial.

Inteligencia contextual cada semana.

Suscríbete
al newsletter PIZZOLANTE Insights
en www.pizzolante.com



Pizzolante 50 AÑOS

50 years
building trust

República Dominicana



Foto: Pexel

La victoria demócrata en Washington y sus implicaciones para República Dominicana

La victoria demócrata en las elecciones de medio término de 2026 redefine el equilibrio de poder en Estados Unidos. El nuevo escenario abre interrogantes sobre las políticas comerciales, migratorias y de cooperación internacional, con posibles repercusiones para la economía dominicana y su sector empresarial.

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 marcaron un giro en el escenario político estadounidense. El Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, poniendo fin a las mayorías republicanas. El resultado abre una etapa de gobierno limitado durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump, en la que la oposición tendrá mayor capacidad para supervisar las decisiones del Ejecutivo y negociar las prioridades legislativas.

Para República Dominicana, este cambio trasciende las relaciones diplomáticas. Sus posibles implicaciones alcanzan ámbitos fundamentales de la economía nacional, como el comercio y la inversión, las remesas y la migración, el turismo y la seguridad regional. Para las empresas, el impacto dependerá de cómo las decisiones estadounidenses se traduzcan en nuevas condiciones comerciales, variaciones de la demanda y oportunidades de inversión.

Los especialistas **Eric Jacobstein y Emily Mendrala**, en un análisis publicado por *Americas Quarterly* en mayo de 2026, anticiparon que un Congreso con mayor presencia demócrata podría reforzar la supervisión de las políticas comerciales, migratorias y de seguridad hemisférica. Sin embargo, el presidente conservaría amplias facultades ejecutivas, por lo que el cambio de mayoría no supone necesariamente una transformación inmediata de las políticas estadounidenses.



Foto: Pexel

Comercio e inversión

La relación comercial constituye uno de los principales vínculos entre Estados Unidos y República Dominana. Según la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó **US$34,200 millones en 2025**, un crecimiento del 3 % respecto al año anterior. Esta interdependencia convierte las decisiones de Washington en un factor relevante para las exportaciones dominicanas, especialmente las zonas francas y la industria manufacturera.

La nueva mayoría demócrata podría intensificar el escrutinio legislativo sobre las políticas arancelarias de Trump, aunque cualquier modificación dependerá de negociaciones y decisiones concretas. En abril de 2025, el economista **Jaime Aristy Escuder** calificó como **«un duro golpe»** los aranceles anunciados entonces por Estados Unidos, al advertir que podían afectar la competitividad de las exportaciones y la atracción de inversiones hacia el país.

No obstante, las transformaciones comerciales también pueden representar oportunidades. **Ernesto Revilla**, economista jefe para América Latina de Citi, destacó en junio de 2026 la estabilidad social y política dominicana como una ventaja para atraer inversiones. En una perspectiva complementaria, **Jorge Díaz**, ejecutivo de DP World, señaló que las disrupciones del comercio internacional pueden favorecer la diversificación de mercados y el desarrollo logístico.

Para el empresariado dominicano, el reto estará en evaluar su exposición a posibles cambios arancelarios y sus efectos sobre la competitividad. Al mismo tiempo, la reorganización de las cadenas de suministro podría abrir oportunidades para atraer inversiones, fortalecer la capacidad logística y ampliar la presencia de productos dominicanos en nuevos mercados.

Remesas y migración

De acuerdo con el Banco Central, República Dominicana recibió **US$9,489.8 millones en remesas entre enero y septiembre de 2026**, mientras que el 80.9 % de las transferencias formales de septiembre procedió de Estados Unidos. Estas cifras evidencian la importancia de ese mercado laboral para los ingresos y el consumo de numerosas familias.

El nuevo Congreso podría ampliar la supervisión de las políticas fiscales y migratorias que afectan a la diáspora, aunque su capacidad para modificarlas estará condicionada por las atribuciones presidenciales. Durante el debate de 2025 sobre un impuesto a determinadas remesas, la economista **Ellen Pérez Ducy** consideró que su impacto agregado podría ser limitado bajo ciertos supuestos, mientras **Franklin Vásquez** advirtió sobre posibles consecuencias para los gastos esenciales de los hogares vulnerables.

Las implicaciones también podrían extenderse al consumo interno. Una reducción significativa de las remesas podría disminuir el ingreso disponible de los hogares receptores y trasladarse al consumo de bienes y servicios, especialmente en el comercio minorista. En este contexto, la evolución del empleo y las condiciones migratorias de la diáspora adquieren relevancia para las empresas vinculadas al mercado interno.

El nuevo Congreso estadounidense podría influir en las decisiones de cooperación y seguridad hacia el Caribe

Turismo

Estados Unidos figura entre los principales mercados emisores de visitantes hacia República Dominicana. En consecuencia, la evolución del empleo, la inflación y el ingreso disponible de los estadounidenses puede influir en la demanda de viajes y en el gasto turístico. El economista Ernesto Revilla también ha destacado la relación entre la fortaleza de la economía estadounidense y los flujos de turismo, remesas y demanda de productos de la región.

En este ámbito, los efectos del resultado electoral serían principalmente indirectos y dependerían de la evolución de la economía estadounidense. Para el sector turístico dominicano, el comportamiento de las reservas, el gasto por visitante y la dependencia del mercado norteamericano serán indicadores relevantes para anticipar variaciones en la demanda y ajustar sus estrategias comerciales.

Haití y seguridad regional

La crisis haitiana representa un desafío para República Dominicana por sus implicaciones fronterizas, migratorias y de seguridad. En septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogó hasta marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, manteniendo los esfuerzos internacionales de apoyo a la seguridad.

La nueva composición del Congreso estadounidense podría influir en las decisiones presupuestarias y en la supervisión de los programas de cooperación internacional, aunque el resultado electoral no garantiza mayores recursos para Haití. Ante este escenario, el politólogo **Abraham F. Lowenthal** defendió la importancia de fortalecer los mecanismos multilaterales para atender desafíos que requieren respuestas coordinadas.

Esta discusión se desarrolla, además, en un contexto de renovado interés de Washington por su influencia en el hemisferio occidental. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en diciembre de 2025, recuperó la Doctrina Monroe mediante el denominado «Corolario Trump», que prioriza la seguridad regional, la protección de infraestructuras estratégicas y la contención de la influencia de potencias extrarregionales. Para República Dominicana, esta orientación añade una dimensión geopolítica a sus relaciones con Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad, cooperación e inversiones.

Para República Dominicana, la evolución de la seguridad en Haití también tiene una dimensión económica. Las condiciones de acceso a los pasos fronterizos, la seguridad del transporte y las posibles interrupciones del comercio binacional pueden incidir en la continuidad de las operaciones de las empresas vinculadas a esta actividad.



Foto: Pexel

Perspectivas hacia 2028

La victoria demócrata abre una etapa de mayor negociación política de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2028. Durante los próximos dos años, Trump tendrá que gobernar con un Congreso controlado por la oposición, mientras ambos partidos avanzan en la definición de sus propuestas y liderazgos. No obstante, el alcance de la agenda legislativa seguirá condicionado por las facultades presidenciales y la capacidad de alcanzar acuerdos.

Para República Dominicana, este período plantea la importancia de mantener una interlocución institucional con Washington que trascienda los ciclos electorales. Para el empresariado, las decisiones que surjan de ese nuevo equilibrio deberán considerarse en la planificación de inversiones, el análisis de mercados y la gestión de riesgos.

Más allá del resultado electoral, el foco estará en comprender cómo los cambios políticos estadounidenses pueden incidir en los intereses dominicanos y traducir esa comprensión en decisiones que fortalezcan la competitividad, las relaciones bilaterales y las oportunidades de desarrollo del país.

Recomendaciones estratégicas para el empresariado dominicano

Evaluar la exposición comercial: identificar posibles impactos de cambios arancelarios en costos, exportaciones y competitividad.

Diversificar mercados: reducir la dependencia de Estados Unidos y explorar nuevos destinos comerciales.

Aprovechar oportunidades de inversión: identificar posibilidades de nearshoring, alianzas estratégicas y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Monitorear las políticas migratorias: evaluar sus posibles repercusiones en las remesas, el consumo interno y la demanda de bienes y servicios.

Fortalecer la gestión de riesgos: incorporar escenarios políticos, comerciales y regulatorios en la planificación empresarial.

Identificar oportunidades de cooperación: explorar proyectos vinculados con infraestructura, logística, energía y desarrollo regiona.



Escrito por:
Carolina Suero / Account Executive

PENSAR EN VOZ ALTA

PODCAST

Best industry focused podcast series 2026

GALARDONADO CON UN

PLATINUM MARCOM AWARD 2026

Un espacio dedicado a compartir reflexiones y contenidos que pretenden aportar a la delicada tarea de gestionar intangibles en favor de la reputación y sostenibilidad empresarial.

Más de 70 episodios en 5 temporadas.



Escuchalo en
www.pizzolante.com o en las mayores plataformas de audio streaming.

Pizzolante

THONY DA SILVA ROMERO

Centroamérica



Un nuevo equilibrio en Washington matiza la agenda con Centroamérica

Los resultados preliminares y las proyecciones disponibles tras las elecciones de medio término del 3 de noviembre anticipan una nueva correlación de fuerzas en Washington, con consecuencias que trascienden la política interna. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se encuentran particularmente expuestos a posibles efectos, debido a la intensidad de sus vínculos migratorios, económicos, comerciales y políticos con ese país.

La nueva correlación de fuerzas en Washington puede incidir sobre asuntos como las deportaciones, el estatus de TPS para migrantes, las sanciones de la OFAC a funcionarios de gobiernos cuestionados por sus prácticas democráticas, y seguramente, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, el resultado electoral no supone un giro automático en la política estadounidense. En una de sus primeras declaraciones, el presidente Trump expresó su disposición a negociar con los demócratas. Algo previsible; si no, necesario, pero esto no descarta escenarios de confrontación institucional entre la Casa Blanca, las cámaras del Senado y de Representantes, los gobernadores recién electos, y entidades de la sociedad civil, en particular de migrantes, que podrán sentirse con mayor legitimidad para ejercer influencia.

Las elecciones de medio término no cambian necesariamente los objetivos de Estados Unidos en Centroamérica, pero sí pueden modificar los contrapesos, instrumentos y actores que intervienen en su ejecución.

El resultado electoral no supone un giro automático en la política estadounidense. Migración, seguridad y democracia seguirían entre los principales temas de la agenda regional, aunque podría cambiar el orden de las prioridades.

Un congreso con capacidad para condicionar

Respecto a la política exterior y seguridad interna, incluyendo el sistema migratorio, el presidente conserva amplias facultades. Sin embargo, quedan abiertas opciones para que algunos de los legisladores recién electos puedan intentar limitar o supervisar la actuación del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mediante iniciativas de ley, controles presupuestarios, audiencias e investigaciones.

Por su parte, los gobernadores pueden modificar el grado de cooperación de sus estados con las autoridades migratorias federales o impugnar determinadas políticas ante los tribunales.

El Congreso, no obstante, controla herramientas igualmente relevantes: el presupuesto, la supervisión de las agencias federales y, en el caso del Senado, la confirmación de embajadores, jueces y altos funcionarios.

La restitución de USAID en su configuración anterior parece poco probable. Sin embargo, un Congreso con prioridades diferentes podría intentar preservar o recuperar partidas de cooperación internacional, canalizándolas mediante el Departamento de Estado, otras agencias, organismos multilaterales o entidades ejecutoras.

Desde la perspectiva regional, la nueva correlación de fuerzas en Washington exige que las cancillerías y embajadas busquen ganar espacios ante congresistas y senadores, así como ante gobernadores, alcaldes y autoridades de estados, condados y ciudades donde se concentran sus comunidades nacionales.

Los gobiernos centroamericanos deberán ampliar su interlocución más allá de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Será necesario relacionarse con congresistas, senadores, gobernadores, alcaldes, empresas y organizaciones de la diáspora.

Por ejemplo, Virginia y Maryland, para los salvadoreños, o California, Texas y Florida, para hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses.

En estos lugares las organizaciones comunitarias podrán presionar a los nuevos legisladores para proteger o restituir el TPS, según la situación de cada nacionalidad, y promover alternativas legislativas para beneficiarios con un prolongado arraigo en Estados Unidos.



Las organizaciones comunitarias podrán presionar a los nuevos legisladores para proteger o restituir el TPS, según la situación de cada nacionalidad, y promover alternativas legislativas para beneficiarios con un prolongado arraigo en Estados Unidos.

Cada país, una realidad



Nayib Bukele ha alardeado de su relación con Trump, al punto de que el gobierno salvadoreño se mostró dispuesto a recibir en el CECOT a deportados de terceros países y planteó la posibilidad de alojar a personas condenadas en Estados Unidos “a cambio de una tarifa". (1) El alcance de esta cooperación podría ser sometido a mayor escrutinio presupuestario, jurídico y político por el nuevo Congreso.

La relación entre Washington y San Salvador podría matizarse entre el mantenimiento de una relación basada en migración, deportaciones, seguridad y combate contra las pandillas, y un escrutinio del nuevo Congreso en temas relacionados con democracia y derechos humanos.

En lo que respecta a Guatemala, a los temas base que comparte con los demás países de la región, podría sumarse el tema de la estabilidad institucional, especialmente en 2027, cuando se avecinan elecciones nacionales de las que resultará el sustituto de Bernardo Arévalo. El reto en la relación bilateral con Estados Unidos está en superar las turbulencias internas del conflicto Arévalo – Ministerio Público, demostrar equilibrios, transparencia y continuidad en las políticas públicas.

Si Guatemala logra reducir sus tensiones institucionales y ofrecer condiciones confiables de ejecución, podría encontrar en el Congreso mayor disposición a financiar programas de desarrollo rural, prevención de la violencia y fortalecimiento de la justicia. Su implementación dependerá, sin embargo, de las prioridades del Departamento de Estado y de la relación bilateral.

La relación con Honduras estará marcada por la cercanía de Washington con el gobierno de Nasry “Tito” Asfura y por la coincidencia expresada en seguridad, control migratorio y fortalecimiento de los vínculos económicos.

El reto de Asfura desde Tegucigalpa será evitar que la agenda bilateral quede limitada a la migración y ampliar la conversación hacia inversión, producción y oportunidades de negocios a partir de mejores condiciones arancelarias.

Desde Washington, la Casa Blanca y Rubio desde el Departamento de Estado, procurarán contener la influencia regional de gobiernos y actores que considere contrarios a sus intereses estratégicos.

(1) https://www.bbc.com/mundo/articles/c20g4km1v63o

En este sentido, se apunta a Nicaragua. Existe la particularidad de que las críticas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen un considerable nivel de coincidencia entre demócratas y republicanos. En ambos partidos existe un amplio espacio de afinidad sobre la necesidad de mantener presión frente al deterioro de las libertades civiles, la situación de los presos políticos y la concentración de poder. Por esta razón, es previsible que continúen las sanciones individuales, las restricciones financieras y la presión diplomática.

Mientras la administración federal podría mantener una política restrictiva, desde el Congreso legisladores vinculados con estados donde reside una comunidad nicaragüense significativa tendrán incentivos para defender mecanismos de protección.

El nuevo escenario también plantea retos para empresas, inversionistas y organizaciones sociales. La política migratoria puede afectar la disponibilidad de trabajadores, las remesas, los costos de cumplimiento, la reputación de los países y las decisiones de inversión.

Como indicador de la magnitud del fenómeno, datos recopilados por American Friends Service Committee y citados por Semanario Universidad (2) contabilizan 365.321 deportaciones y retornos registrados en el corredor formado por México y Centroamérica entre enero de 2025 y agosto de 2026.

La necesidad de reducir las causas de la migración puede estimular programas de empleo, formación técnica, infraestructura y desarrollo de proveedores. Asimismo, la reorganización de las cadenas de suministro puede fortalecer la posición de Centroamérica como plataforma próxima al mercado estadounidense.

Así como los gobiernos, también las empresas deben reformular sus tácticas de relacionamiento con embajadas y organizaciones del tercer sector en Washington.

Aun cuando el presidente Donald J. Trump ha demostrado ser poco predecible, el escenario más probable es que la región tenga que gestionar varias agendas estadounidenses que competirán entre sí durante los próximos dos años. En una acción que puede interpretarse como simbólica, el 6 de noviembre Trump firmó una Orden Ejecutiva designando la Oficina Oval y la Sala del Gabinete como monumentos nacionales. Una forma de decir que la Casa Blanca sigue siendo su bastión.

(2) 365.321 personas han sido deportadas desde y hacia Centroamérica y México entre los años 2025 y 2026. Semanario Universidad. Por Maria Núñez Chacón. 20 agosto, 2026.



Foto oficial de la Casa Blanca por Molly Riley.



Escrito por:
Luis Francisco Indriago / Senior Consultant

SINERGIA Iberonet · ComuniCorpo Red de Comunicadores Corporativos · UCAB Universidad Católica Andrés Bello · IDICI Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación

II FORO VENEZUELA • 2026

EL ECOSISTEMA DE LA REPUTACIÓN Y LA CONFIANZA

03 DE DICIEMBRE | UCAB · Auditorio SJ Padre José Virtuoso. Modalidad híbrida
8:30 AM – 2:00 PM

PONENTES



Ítalo Pizzolante
Socio fundador de la firma PIZZOLANTE | Embajador de Corporate Excellence.



Francisco Alwyns
Presidente de LLYC Chile Regional Council de Global Alliance



Carmen Yolanda Moreno C.
CEO y Directora de Sinergia Iberonet



Agustín Beroes
Director de Mercado, PIZZOLANTE Venezuela

EL PANEL DE LA REPUTACIÓN



MODERADORA
Agrivalca Canelón
Consultora estratégica e investigadora IDICI-UCAB



Isabela Iturriza
Directora de Comunicaciones de Venemergencia



Yuraima Mercado
Directora Fundadora de YM Agency



Gustavo Hernández
Director
IDICI –UCAB



Ana Marina Ascanio
Gerente de Asuntos Corporativos, Farmatodo



Fabiana Rodríguez
Gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales. Mondelez International.

LA TERTULIA DE LA CONFIANZA



MODERADORA
Thamara Laurens
Fundadora y Directora de Red ComuniCorpo



Yarubay Anuel
Directora de Comunicaciones, Grupo Leti



Thony Da Silva
Consultor estratégico, CEO PIZZOLANTE



Ramón Ostos
Country Senior Partner, KPMG Venezuela



Tulia Monsalve
Directora y CEO de Grupo Plus Comunicación Estratégica.



Roxanys Paredes R.
Directora de Imagen Pública, Rotary Baruta – Las Mercedes



Anisabel García
Gerente de Estrategia de Sostenibilidad, Empresas Polar

Registrate aquí

ALIADOS

CORPORATE EXCELLENCE
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Approaching The Future 26
TENDENCIAS EN REPUTACIÓN E INTANGIBLES

Pizzolante 50 AÑOS
4.º Estudio de la Confianza

PATROCINAN

GRUPO LETI · movilnet · MONTANA

Colombia



Foto: Contrapunto

Renacer para crecer y transformar

Ese fue el slogan de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se celebró en Cartagena a principios de noviembre y congregó a miles de personas vinculadas al sector.

Después de cuatro años en los que la industria del petróleo y gas en Colombia fue presentada, casi como una actividad criminal, se respira un nuevo aire alrededor de un asunto fundamental para el país: su seguridad y soberanía energéticas.

Los gremios organizadores hicieron un gran trabajo al convocar a públicos diversos alrededor de temas críticos para el futuro de Colombia, y lo hicieron, además, en un momento crucial, marcado por la profunda crisis fiscal que enfrenta el país.

El camino es desafiante, pero hay camino. Durante los cuatro años del gobierno anterior se estigmatizó a la industria y se buscó marchitarla, apostándole a una transición energética acelerada que no produjo los resultados esperados.

Sin desconocer la importancia de las energías renovables, hoy el lenguaje ha cambiado: ya no se habla tanto de transición como de adición energética. Y tiene sentido. Las proyecciones muestran que la demanda de combustibles fósiles seguirá siendo significativa durante las próximas décadas. La pregunta, como lo ha sido durante años, es cómo producir responsablemente los recursos que, en el caso colombiano, son fundamentales para las finanzas públicas y la seguridad energética.

El reto inmediato es recuperar la capacidad de producir petróleo y gas y crear las condiciones para que Colombia pueda volver, como primera meta, al millón de barriles diarios. Todo ello bajo criterios exigentes de protección ambiental y respeto por las comunidades.

Uno de los asuntos recurrentes durante la Cumbre fue la necesidad de destrabar los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, establecer reglas que incentiven la inversión en un entorno de feroz competencia internacional y construir los consensos políticos necesarios para avanzar. En términos generales, existe coincidencia entre los actores empresariales y estatales sobre los objetivos. Pero una cosa es estar de acuerdo y otra, muy distinta, conseguir que las cosas pasen y que pasen rápido.

En ese sentido, fueron importantes los mensajes del Gobierno. La ministra de Minas y Energía, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y

En Colombia hay avances regulatorios importantes y proyectos en YNC que podrían ponerse en marcha, aunque todavía faltan instrumentos técnicos y ambientales

otros funcionarios expresaron su compromiso con la reactivación de la exploración, la asignación de nuevas áreas mediante procesos competitivos y el desarrollo de los recursos disponibles en las distintas cuencas del país. También hay una apuesta por sacar adelante proyectos estratégicos de gas costa afuera, como Sirius y Komodo, y por avanzar hacia la perforación de un primer pozo de Yacimientos No Convencionales (YCN o fracking).

Sobre estos últimos, existe un entusiasmo considerable, alimentado en buena medida por los resultados que ha obtenido Argentina con el desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta.

En Colombia hay avances regulatorios importantes y proyectos en YNC que podrían ponerse en marcha, aunque todavía faltan instrumentos técnicos y ambientales. La experiencia argentina ofrece lecciones valiosas. Los resultados de Vaca Muerta muestran el potencial que puede tener esta actividad para transformar la economía de un país. Si Colombia decide recorrer ese camino, tendrá que hacerlo con rigor técnico, responsabilidad ambiental y social, pero también con decisión y sin dilaciones innecesarias.

Una parte importante de la inversión que ha llegado a Argentina se explica por la creación de condiciones especiales para los grandes proyectos, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En Colombia, el proyecto de Ley de Rescate Económico incorporó una propuesta denominada Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), inspirada, entre otras experiencias, en este tipo de mecanismos.

La lógica detrás de estos regímenes es sencilla: para atraer grandes capitales se necesitan condiciones competitivas, estabilidad jurídica y reglas de juego previsibles. Es posible que algunos de estos incentivos impliquen tratamientos tributarios preferenciales, pero la apuesta consiste en que las inversiones adicionales generen actividad económica, empleo, exportaciones, encadenamientos productivos y mayores ingresos fiscales en el mediano y largo plazo. En otras palabras, no basta con tener riqueza en el subsuelo. Es necesario atraer el capital, la tecnología y el conocimiento que permitan convertir ese potencial en riqueza efectiva.

Nada de esto será fácil. Crear incentivos, destrabar el licenciamiento y las consultas previas, atraer inversiones, negociar y concretar contratos y, finalmente, convertir las reservas en producción, constituye un proceso complejo. Desde la firma de un contrato hasta la primera molécula de gas o el primer barril de petróleo, pueden transcurrir seis años o más. En el caso de Sirius, por ejemplo, se habla de 2030 como horizonte para el inicio de la producción, mientras que Komodo está apenas en la fase exploratoria. Hay mucho trabajo de letra menuda: reglamentar, coordinar instituciones, armonizar procedimientos, construir confianza y garantizar que las comunidades participen y reciban los beneficios que les corresponden.

Pero si se logran superar esos obstáculos, el premio puede ser jugoso. Según un estudio presentado durante la Cumbre, una apuesta decidida por el sector de petróleo y gas podría representar ingresos fiscales del orden de los 20 billones de pesos anuales durante varios años. Se trata de una cifra muy significativa para un país que necesita recuperar su equilibrio fiscal, financiar sus prioridades de desarrollo y crecer a tasas superiores el 5% anual.

La discusión sobre los recursos naturales no renovables en Colombia tiene, inevitablemente, una dimensión política. Algunos consideran, quizá con cierta ingenuidad, que es necesario desideologizar el debate. Otros creen que la discusión ya está ideologizada y que hay que dar también la batalla en ese terreno. Hay quienes piensan que los datos y los argumentos económicos son suficientemente contundentes para poner en marcha la reactivación. Otros advierten que, en este caso, el relato “mata” el dato y que la industria tiene una tarea pendiente en ese frente.

Durante la Cumbre percibí una industria optimista, pujante, con enorme conocimiento técnico y muchas ganas de avanzar. El desarrollo de los campos convencionales, el recobro mejorado, los YNC y el gas descubierto y por descubrir en el Caribe son piezas centrales en esta ecuación. Todas pueden contribuir al crecimiento del país y a su seguridad energética. Todo suma.

Pero para que ese potencial se convierta en realidad, la industria tiene mucho por hacer. No basta con contar con mejores condiciones para invertir y producir. Es indispensable salir a contar sus historias, hacer pedagogía, escuchar y responder las inquietudes legítimas de las comunidades y demostrar, con hechos, los beneficios de la actividad en los territorios. La inversión debe traducirse en mejores oportunidades y condiciones de vida para las poblaciones vecinas, y la operación debe desarrollarse dentro de un marco de responsabilidad ambiental, ética y respeto por la ley y los derechos humanos.

La Cumbre dejó una sensación de optimismo y una oportunidad que no se puede desaprovechar. El país necesita su industria de petróleo y gas, pero también necesita una industria consciente de su responsabilidad económica, social y ambiental. Renacer es importante. Crecer es necesario. Pero transformar, generando valor para Colombia y sus regiones, es el verdadero desafío.



Escrito por:
Juan Carlos Ucrós / Experto en Asuntos Corporativos del Sector de Energía/Colombia



Foto: Ecopetrol

Pizzolante™ 50 AÑOS

Publicación regional redactada y producida por los equipos de Investigación y Digital de PIZZOLANTE / Noviembre 2026, No.26